Imprimir

Estamos en el peor de los mundos cuando se espera que hechos de violencia, y el saldo que dejan de personas sacrificadas, se conviertan en una cifra a favor de quienes participan en las contiendas electorales. Es la miseria a la que se ha conducido la política y la degradación de valores de los que encarnan el liderazgo y la representación de sus organizaciones. Utilizar acciones, simbologías o imaginarios de violencia y hacer de ellos un medio para alcanzar objetivos políticos no es solo una muestra de la bajeza de ciertas colectividades políticas, sino el saldo histórico de la incapacidad para encontrar caminos civilizados frente a la superación de las tensiones que han inhibido las posibilidades de desarrollo y transformación del país.

Es inadmisible que el rechazo y el dolor a que deben llevar situaciones como las que se presentaron recientemente en los departamentos del Valle y del Cauca cedan a la avidez de triunfo de ciertos candidatos o candidatas, y que concitar el miedo sea la fuente de atracción y movilización de los electores, propósito en el que se incluyen, además, algunos medios de comunicación.

Hacer del miedo un instrumento de movilización, políticamente rentable y traducirlo en políticas de gobierno desvirtúa la esencia de la democracia. Lleva a que individuos y colectivos actúen mediados por decisiones que, aunque aparente y razonablemente digeridas, no son más que formas viciadas de ejercer el control ciudadano y mantener las estructuras y relaciones de poder. Es un recurso de manipulación, se interioriza como condición psíquica, induce y condiciona la voluntad, vence la razón y falsifica la naturaleza de los problemas.

El miedo y la violencia han trivializado la política, la han degradado, vaciado de contenidos y enajenado de sus ciudadanos. Le han negado el lugar que le corresponde como fuente de construcción de convivencia y han dado pábulo a la conformación de organizaciones armadas y delincuenciales, de diverso cuño, que ocupan, rechazan o reclaman la presencia del Estado, siempre lego a la hora de garantizar sus funciones.

No se exagera al decir que Colombia es un país que hace muy poco ha comenzado a vivir en democracia; pues, además de lo que le ha significado trasegar en un escenario permanente de confrontaciones, la mayoría de su historia ha transcurrido bajo el dominio de una legión de políticos -y sus partidos- que llevaron al Estado a ser apropiado por prácticas non santas y a mantener excluidas a otras fuerzas o representaciones no afectas al establecimiento.

Seguir recurriendo al pánico como estrategia de movilización o contención de la presencia ciudadana en el espacio de las deliberaciones es mantener el acento en premisas regresivas y cerrar el paso hacia una ciudadanía imbuida de principios y valores democráticos. Es, también, un contrasentido frente a los esfuerzos que se están librando para que política y violencia lleguen a ser realidades escindidas, y para lograr legitimar los conflictos y hacer que se tramiten por las vías institucionales; condición imperativa para vivir en democracia y superar esa especie de sino trágico al que al país pareciera querer condenársele.

Colombia ya no es el monopolio bipartidista que anegó los caminos de la democracia durante prácticamente todo el siglo XX y los primeros lustros del siglo XXI. La situación ha cambiado, estamos en un escenario con presencia cada vez más protagónica de organizaciones y movimientos sociales que reafirman su liderazgo y trascendencia en la vida nacional. No es ésta la época del Estado de sitio ni la de una institucionalidad plenamente cooptada y roída por la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y el dominio de clanes locales y regionales, aunque haya todavía quienes se resisten a la renovación de las dirigencias y sus amañadas costumbres.

Es verdad que hay serios problemas de seguridad, pero el temor no construye respuestas, no edifica en democracia y no logra sortear el fracaso del Estado ante ese conjunto complejo de factores en los que la inseguridad toma forma: las necesidades sociales, la garantía de bienes públicos, la vigencia del Estado Social de Derecho, que rebasan las salidas puramente militares a las que generalmente conducen las estrategias fundadas en el miedo.

Por fortuna hoy existe un electorado con mayor capacidad de reflexión, con un talante más crítico para la recepción de las propuestas y el trámite de la información. En otras palabras,

menos susceptible a la manipulación y más cerca del ideal democrático que les respira en la nuca a los que, más bien por su propio miedo, pretenden seguir cosechando en las miserias de la guerra.

Orlando Ortiz Medina, Economista-magister en estudios políticos

Foto tomada de: Consejo Regional Indígena del Cauca